

Nombre de la publicación:

"LA TERCERA DE LA HORA"

Ciudad SANTIAGO

Fecha: Año 1992 Mes 8 Día 29

Página 3 Columna 7

Ubicación del recorte

Biblioteca del Congreso Nacional - Anexo

Editorial

Pena de muerte

La polémica suscitada por la determinación del Presidente de la República de conmutar la pena de muerte a que habían sido condenados tres ciudadanos peruanos, autores del asesinato de dos jóvenes universitarios ariqueños, se inscribe dentro de un debate filosófico de antigua data que sigue exhibiendo posiciones justificadas por parte de quienes sostienen la necesidad de abolir dicha sanción penal y de aquellos que son partidarios de mantenerla.

Emitir un juicio fundado sobre el particular, aceptando una u otra tesis, excede los límites de estas columnas y contribuiría poco a variar las posiciones que cada quien detenta sobre el particular.

Sin embargo, es aconsejable recordar que, conforme con nuestro ordenamiento jurídico, corresponde al Presidente de la República, en caso de serle solicitada su intervención, pronunciarse respecto a si mantiene la pena capital para el caso particular en que haya sido dictada o la conmuta por la de presidio perpetuo.

Y en la especie, más allá de valoraciones morales subjetivas, el Primer Mandatario decidió, en uso de una facultad que le es privativa, cambiar la sanción penal aplicada a los referidos delincuentes por la que la ley establece como alternativa.

Nadie podría sostener, con argumentos atendibles, que esperaba del Jefe del Estado una actitud diferente a la que asumió, toda vez que es pública y notoria su irrestricta adhesión a los postulados que propician la abolición de la pena capital en Chile y eso

quedó palmariamente demostrado en su primer proyecto de ley enviado al Parlamento, en el que, precisamente, propuso dicha derogación.

En consecuencia, más que una discusión sobre la abolición o mantenimiento de esa sanción, a veces bizantina, otras estéril y siempre interminable, lo que parece oportuno es prevenir que quienes pudieren ser objeto del perdón presidencial puedan recuperar su libertad luego de transcurridos 10, 15 ó 20 años y la pena de presidio perpetuo quede frustrada por mecanismos administrativos como el de la libertad condicional.

Hacer posible, a través de las reformas legales que correspondan, que quien resulte condenado por decisión judicial o por el ejercicio del derecho presidencial a conmutar la pena de muerte a la de presidio perpetuo cumpla efectivamente esa sanción, al margen de las disposiciones sobre libertad condicional, parece ser actualmente la solución a un problema que se arrastra por años y que, de paso, permite a delincuentes autores de delitos que repugnan la conciencia ciudadana y causan daños irreparables a sus víctimas, recuperar su libertad tras algunos años en prisión.

Del modo expuesto, no quedarían frustrados los legítimos propósitos de la sociedad de precaverse de conductas como las reseñadas y de sancionarlas de manera ejemplarizadora y capaz, efectivamente, de desincentivar la delincuencia.